SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN 11/2015

Recomendación N°	11/2015
Autoridades Responsables	Agentes de Seguridad Pública del Estado
Expediente	4VQ-0070/2013
Fecha de emisión/	29 de abril de 2015
HECHOS	
<p>Este Organismo Estatal solicitando la investigación de posibles violaciones a los derechos humanos, que se cometieron en agravio de V1, en relación con la detención que efectuaron elementos de Seguridad Pública del Estado.</p> <p>La víctima manifestó que el 30 de junio de 2013, a las 12:30 horas, se encontraba en el interior del domicilio de V2, ubicado en la Zona Centro de la ciudad de Matehuala, San Luis Potosí, cuando agentes de la Policía Estatal sin mostrar orden de autoridad competente, ingresaron y procedieron a su detención, que al subirlo a una de las unidades de policía, le dijeron que si no informaba donde localizar a su cuñado iban a perjudicar a su familia.</p> <p>Por su parte, V2 señaló que se encontraba en su domicilio en compañía de V1, cuando agentes de Policía Estatal ingresaron sin mostrar orden de cateo, y procedieron a revisar en el interior de las habitaciones con el argumento que buscaban a uno de sus hijos, así como también buscaban enervantes, que al no localizarlo procedieron a la detención de V1.</p> <p>V1 precisó que fue trasladado al edificio de Seguridad Pública del Estado en la Ciudad de San Luis Potosí, una vez en ese lugar fue agredido mediante golpes en las costillas, abdomen y nuca, que posterior a esto fue certificado medicamente y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Narcomenudeo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde se radicó la Averiguación Previa 1, por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.</p>	
Derechos Vulnerados	✓ A la libertad personal y privacidad
OBSERVACIONES	
<p>En tal sentido, del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que se integraron al expediente de queja 4VQU-70/2013, se encontraron elementos suficientes que permiten acreditar que en el presente caso se vulneraron los derechos humanos a la libertad personal y a la inviolabilidad del domicilio y a la legalidad y seguridad jurídica por actos y omisiones atribuibles a elementos de la Policía Estatal consistentes en detención arbitraria, cateos y visitas domiciliarias ilegales, en atención a las siguientes consideraciones.</p> <p>De los elementos de convicción que se recabaron en la investigación del presente asunto, se observó que el 30 de junio de 2013, aproximadamente a las 12:30 horas, V1 fue detenido por AR1 y AR2, elementos de Policía de la Secretaria de Seguridad Pública, cuando se encontraba en el interior del domicilio de V2, sin que existiera</p>	

orden de autoridad competente para proceder o que se estuviera en la hipótesis de flagrancia o urgencia que señala el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este tenor, en el informe que sobre los hechos rindió la autoridad se precisó que AR1 y AR2, agentes de policía de Seguridad Pública del Estado, en el oficio AOE/0160/2013, de 30 de junio de 2013, señalaron que al transitar sobre la calle Libertad Intersección con la calle de Nicolás Régules de la Zona Centro, de la Ciudad de Matehuala, se percataron que V1 arrojó una bolsa al piso, por lo que revisaron el contenido de la bolsa, el cual tenía un vegetal verde y seco, motivo por el cual procedieron a su detención.

Al respecto, V1 manifestó tanto en su declaración ante este Organismo Estatal, que el 30 de junio de 2013, se encontraba en el domicilio de V2, cuando agentes de la Policía Estatal ingresaron al inmueble preguntando por su cuñado, que al no encontrarlo procedieron a su detención, circunstancia de la cual se percataron V2, T1, T2, T3, T4 y T5, esta versión concuerda con la declaración preparatoria de 3 de julio de 2013, que rindió el Juez Segundo del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial, dentro de la Causa Penal 1.

En este sentido, las declaraciones de T4 y T5, son también coincidentes con lo que relató V1 en cuanto a los hechos, al señalar que se encontraban en el domicilio de V2, que tocaron a la puerta porque V1 procedió a abrir y se percatan de que se trataba de agentes de la Policía Estatal, quienes sin mayor explicación ingresaron y cuestionaban a V1 por el paradero de su cuñado, que al contestar que no sabía procedieron a su detención, sin que en ese momento se les informara el motivo de su aseguramiento.

Con base en los testimonios y los señalamientos de V1 y V2, se advirtió que el parte de Policía, respecto a la forma y lugar de los hechos de la detención de V1, contiene inconsistencias, como lo que se señala en la Causa Penal 2, que resuelve poner en libertad a V1, ya que no existen otros datos para robustecer el señalamiento de los agentes aprehensores, y existe mayor valor, como lo advierte el Juzgador, los testimonios al encontrar coincidencias en cuanto al lugar y forma de la detención.

Aunado a lo anterior, la evidencia permite advertir que los policías aprehensores no proporcionaron información adicional para justificar la detención, es decir, no aportaron mayores elementos para acreditar los elementos del tipo penal de Delitos Contra la Salud en su modalidad de narcomenudeo, que imputaron a V1, ya que de acuerdo con las consideraciones que expuso el Juzgador, no se demostró de manera fehaciente que V1 estuviera en posesión de una sustancia considerada como ilícita, además de que no proporcionaron información adicional para sustentar el hecho que esa sustancia estuviera en su posesión. Los aprehensores tampoco pudieron respaldar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que señalan que se suscitó la detención.

Cabe mencionar aquí, que en cumplimiento a Ejecutoria de Amparo 1, el Juez Primero Mixto de Primera Instancia con sede en Matehuala, el 4 de noviembre de 2013, dictó auto de libertad a favor de V1, y en sus consideraciones precisó que el informe de los agentes aprehensores fue un indicio insuficiente, al no estar

corroborado con ningún otro medio de prueba, que sirva para atribuir la posesión del narcótico a V1, esto es, que lo hubiera tenido dentro de su radio de acción y disposición.

En la citada resolución, además precisó que con las pruebas aportadas dentro de la Causa, se estableció que la detención no se llevó a cabo en la forma en la que manifestaron los agentes de policía, ni V1 fue encontrado en posesión de sustancias ilícitas ya que se advierte que la detención de V1 ocurrió en el interior del domicilio de V2, y sin poseer algún narcótico, lo cual se corrobora con las declaraciones de T1, T2, T3, T4 y T5.

En otro aspecto, por lo que respecta al derecho a la inviolabilidad al domicilio, de las constancias recabadas se advirtió que los agentes aprehensores ingresaron al domicilio de V2, en presencia de V1, T1, T2, T3, T4 y T5, que al realizarlo no mostraron orden de autoridad competente que los autorizara, y que además realizaron una revisión en el interior del inmueble, bajo el argumento de que buscaban enervantes y a una persona, sin que hayan mostrado la orden de autoridad correspondiente, o que se hayan justificado su legal proceder, circunstancia que incluso negaron que hayan ingresado al lugar ya que en la información que proporcionaron, señalaron que detuvieron a V1 en otro sitio.

No obstante lo anterior, esta Comisión Estatal coincide con el argumento que expuso el Juez de la Causa Penal 2, en el sentido de que los agentes aprehensores no aportaron datos adicionales que permitieran dar solidez a su señalamiento, luego entonces, se concede mayor valor a los testimonios que señalan que policías Estatales ingresaron al domicilio de V2.

Cabe señalar que el derecho a la inviolabilidad del domicilio constituye una prerrogativa fundamental de protección de la persona, establecida para garantizar el ámbito de privacidad de ésta, dentro del espacio limitado que elige, y que se caracteriza para evitar agresiones injustas del exterior, de otras personas o de la autoridad pública. El domicilio de las personas es un espacio en el cual el individuo vive y ejerce su libertad más íntima. La inviolabilidad del domicilio impone como requisito para efectuar cualquier penetración una orden de autoridad judicial, lo que en el presente caso no ocurrió.

En estos hechos se constató que con su acción, los agentes de autoridad se apartaron de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos que tutelan la inviolabilidad del domicilio como los artículos 17.1 y 17.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

RECOMENDACIONES

A Usted Secretaria de Seguridad Pública del Estado

PRIMERA. Gire las instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se repare el daño ocasionado a V1 y V2, que incluya la atención psicológica con motivo de la responsabilidad institucional en que incurrió personal a su cargo, y envíe a esta Comisión las constancias de cumplimiento.

SEGUNDA. Colabore ampliamente con Unidad de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública, a efecto que integre y concluya el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos que participaron en los hechos, en razón de las consideraciones vertidas en la presente Recomendación, proporcionando para tal efecto las constancias que le sean requeridas y tenga a su alcance.

TERCERA. Colabore ampliamente con este Organismo Estatal, en el seguimiento e inscripción de V1 en el Registro Estatal de Víctimas, previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, y se proporcione la información que se solicite y tenga a su alcance.

CUARTA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que se incluya en el programa de capacitación permanente a los elementos operativos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, el tema de derechos humanos, en particular el derecho a la libertad personal, a la inviolabilidad del domicilio y los requisitos constitucionales y legales para la práctica de cateos, y el Código Nacional de Procedimientos Penales, enviando a esta Comisión la información para acreditar su cumplimiento.